



## **A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS**

El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Comisión para Políticas Integrales de Discapacidad, relativa a hacer efectivo el derecho de las personas dependientes a percibir servicios o prestaciones.

Congreso de los Diputados, Madrid, 21 de Abril de 2016

Íñigo Errejón Galván

Portavoz del Grupo Parlamentario  
Podemos-En Comú Podem-En Marea

## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Este año se cumplen ya diez años desde la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y nos encontramos con que una de cada tres personas en situación de dependencia, 433.000, se encuentran en lo que se ha denominado “el limbo de la dependencia”.

“El limbo de la dependencia” es el término utilizado para definir la situación de aquellas personas dependientes a las que la Ley 39/2006 reconoce el derecho a percibir servicio o prestación, y sin embargo éste no se ha hecho efectivo debido a los retrasos en la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA).

El Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, implicó un retroceso en los derechos reconocidos en materia de dependencia, al introducir en su título III las llamadas “Medidas de racionalización del sistema de dependencia” que han supuesto la obstaculización o bloqueo del acceso a las prestaciones o servicios debidos para miles de personas en esta situación.

Dicha “racionalización” supuso el recorte de las aportaciones del Estado a para cubrir el “nivel mínimo de protección”. Según el Dictamen del Observatorio de Dependencia, el balance que se puede hacer tras la última legislatura es que la Administración General del Estado sólo aporta el 22,6% del gasto público, lo que incumple la propia Ley de Dependencia, en la que se afirma que esa cifra debería llegar al 50%. De esta forma la carga recae en las comunidades autónomas, que cubren el 77,4% del montante público.

Además de la reducción en los fondos presupuestarios destinados a la dependencia por parte del Estado, el Real Decreto Ley 20/2012 amplió el plazo en el que debe ser resuelto el expediente persona al período de dos años. Más de la mitad de las personas dependientes son mayores de 80 años. Como resultado de esta modificación, más de 117.000 personas han muerto desde 2012 esperando una ayuda reconocida por el Estado. (*Fuente: Informe Observatorio Estatal sobre la Dependencia 2015*)

Por todo ello se presenta la siguiente:

## **PROPOSICIÓN NO DE LEY**

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Derogar la disposición final primera de la Ley 39/2006 para reconocer el derecho con carácter retroactivo a las personas con dependencia y en un plazo de 6 meses. La nueva redacción quedaría de la forma que sigue:



“El derecho de acceso a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia se generará desde la fecha de presentación de la solicitud. El plazo máximo para la resolución del expediente será de 6 meses desde la fecha de la solicitud”

2. Restablecer los recursos económicos necesarios para cumplir con la aportación requerida por la Ley 39/2006.